



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/6/14
7 de diciembre de 2007

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Sexto período de sesiones
Tema 4 de la agenda

**SITUACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE REQUIEREN
LA ATENCIÓN DEL CONSEJO**

**Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos
en Myanmar, Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, de conformidad con el mandato
que le confió la resolución S-5/1, aprobada por el Consejo de Derechos
Humanos en su quinto período extraordinario de sesiones***

Resumen

En su quinto período extraordinario de sesiones, dedicado a la situación de los derechos humanos en Myanmar, el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución S-5/1, de 2 de octubre de 2007, pidió al "Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar que evaluara la situación actual de los derechos humanos y siguiera de cerca la aplicación de la presente resolución, entre otras cosas, tratando de hacer una visita urgente a Myanmar, y que informara de ello al Consejo de Derechos Humanos en la continuación de su sexto período de sesiones" e instó "al Gobierno de Myanmar a que cooperara con el Relator Especial". El 19 de octubre de 2007, el Gobierno cursó una invitación oficial al Relator Especial e indicó que se le prestaría "plena cooperación". El Relator Especial visitó Myanmar en misión oficial del 11 al 15 de noviembre de 2007. Además, los días 16 y 17 de noviembre de 2007 celebró también reuniones en Bangkok con miembros de la comunidad diplomática, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil.

* El anexo del presente informe se distribuye como se recibió, en el idioma original únicamente.

El presente informe contiene el resultado de las averiguaciones realizadas por el Relator Especial antes de su misión oficial y durante ésta, centradas en la situación actual de los derechos humanos, en particular en las repercusiones para los derechos humanos de la represión de las manifestaciones y los graves actos de represalia. Aunque se trata de lo ocurrido entre agosto y la suspensión del toque de queda el 20 de octubre de 2007, el informe se centra en particular en los trágicos acontecimientos que se produjeron en Myanmar del 26 al 29 de septiembre de 2007. Por último, en el informe se presentan varias recomendaciones del Relator Especial.

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN.....	1 - 3	4
I. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL	4 - 13	4
II. CAUSAS SUBYACENTES DE LOS SUCESOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2007.....	14 - 15	6
III. LOS HECHOS - CIRCUNSTANCIAS Y PRINCIPALES INCIDENTES	16 - 28	7
A. Las protestas pacíficas de agosto de 2007	16	7
B. El incidente de Pakokku, un punto de inflexión	17 - 25	7
C. Las protestas pacíficas de septiembre de 2007 (18 a 25 de septiembre de 2007).....	26	9
D. El uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos (26 a 29 de septiembre de 2007).....	27 - 28	10
IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES	29 - 62	10
A. Uso excesivo de la fuerza contra civiles, incluido el uso de fuerza letal innecesaria y desproporcionada	30 - 38	10
B. El empleo de agentes de represión no oficiales	39 - 40	13
C. Detención y arresto arbitrarios.....	41 - 52	13
D. Desapariciones	53 - 54	17
E. Muerte en prisión	55	18
F. Tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura.....	56 - 57	18
G. Duras represalias contra manifestantes pacíficos	58 - 62	18
V. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y SUS AGENTES	63 - 68	20
VI. CONCLUSIÓN	69 - 75	21
VII. RECOMENDACIONES	76	23
<i>Annex:</i> Chronology and facts: The peaceful protests of September 2007 (18-25 September 2007).....		25

INTRODUCCIÓN

1. El 15 de agosto de 2007, el Gobierno de Myanmar decretó un aumento de los precios de los combustibles de hasta 500%. Esta decisión disminuyó notablemente el poder adquisitivo de los habitantes de Myanmar. La población, cuyo nivel de vida ha descendido drásticamente en los últimos años, reaccionó enérgicamente contra esta decisión y empezó a realizar pequeñas manifestaciones pacíficas durante el mes de agosto y principios de septiembre. El 5 de septiembre, durante una manifestación en Pakokku, varios monjes fueron golpeados. La población y los monjes, disgustados por estos actos, siguieron expresando su descontento con sus condiciones de vida, y del 18 al 26 de septiembre organizaron grandes manifestaciones pacíficas en ciudades de todo el país, como Yangon, Mandalay, Pakokku y Sittwe.
2. Del 26 al 29 de septiembre, el Estado y sus agentes reprimieron duramente a los manifestantes pacíficos. A través de las cámaras de los medios de comunicación internacionales, el mundo pudo ver cómo se mataba, se aporreaba brutalmente y se detenía a numerosas personas. Durante los actos de represión, las fuerzas de seguridad, integradas por efectivos de la policía y las fuerzas antidisturbios (Lone Htein) o la policía militar, así como por miembros de la Asociación para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDA) y la milicia Swan Ah Shin (SAS), se excedieron en el uso de la fuerza contra los civiles, que en ocasiones fue desproporcionada y mortífera.
3. Tras la campaña de represión, se recibieron varias denuncias de asesinatos, brutales palizas y detenciones así como de supuestas torturas, muertes bajo custodia policial, casos de familiares de personas huidas que habían sido tomadas como rehenes, y de heridos sin acceso a atención médica. También se recibieron denuncias de que los cuerpos de algunas de las personas muertas durante la represión habían sido quemados. El Gobierno de Myanmar facilitó cifras que, según muchos observadores independientes, podrían no reflejar el verdadero alcance de la represión.

I. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL

4. El Relator Especial realizó una visita de cinco días a Myanmar, del 11 al 15 de noviembre de 2007, por invitación del Gobierno. El Relator Especial desea agradecer al Gobierno las atenciones que le dispensó, que aceptara el programa propuesto por el Relator Especial y le facilitara varios documentos y relaciones cronológicas escritas de los sucesos, así como que le diera acceso a la mayor parte de los lugares que pidió visitar. El Relator Especial subraya que su misión no se puede considerar como una verdadera misión de determinación de hechos, pues para que se dieran las condiciones necesarias para realizar una misión de investigación independiente y confidencial se hubiera necesitado un entorno diferente. A este respecto, el Relator Especial señala que su misión debería considerarse como la etapa inicial de un proceso y que las autoridades se han mostrado dispuestas a facilitarle futuras misiones de seguimiento.
5. En la nueva capital, Nay Pyi Taw, el Relator Especial se reunió con el General de División Maung Oo, Ministro del Interior; U Nyan Win, Ministro de Relaciones Exteriores, U Aung Kyi, Ministro de Trabajo y Ministro de Enlace con la Secretaría General de la Liga Nacional para la Democracia (NLD); U Soe Tha, Ministro de Planificación Nacional y Desarrollo Económico; el General de Brigada Thura Myint Maung, Ministro de Asuntos Religiosos, y U Zaw Min,

Secretario General Conjunto de la USDA. Asimismo, participó en una mesa redonda con 20 miembros del recién creado órgano estatal de derechos humanos. En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial tratará de diversas cuestiones temáticas importantes que planteó a las autoridades, y que seguirá tratando en sus próximas misiones a Myanmar.

6. El Relator Especial se reunió, en presencia de varios funcionarios del Gobierno, con el Coordinador Residente y el equipo de las Naciones Unidas en el país, con más de 20 embajadores y representantes del cuerpo diplomático, así como con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales. También se entrevistó con representantes de los diferentes grupos étnicos nacionales y con asociaciones de mujeres para el desarrollo.

7. En Yangon, el Relator Especial celebró consultas con altos funcionarios de diferentes instituciones, como el Ministerio del Interior, las fuerzas del orden, el Consejo de Yangon para la Paz y el Desarrollo y el Hospital General de Yangon. Lamentablemente no pudo reunirse con altos mandos militares. El Relator Especial también visitó el antiguo instituto técnico del Estado (que durante las manifestaciones fue utilizado como centro de detención), el cuartel general de la comandancia del 7º batallón de policía en Kyauktan, Thanlyin y el crematorio de Htain Bin.

8. Durante su segunda visita a la cárcel de Insein, se lo autorizó a reunirse con cinco detenidos: Win Tin, el preso político más antiguo, pues lleva 18 años en la cárcel, cuya liberación inmediata pidió -como en otras oportunidades- el Relator Especial; Su Su Nway, un activista destacado que fue detenido durante la visita del Relator Especial; Min Zeya y Than Tin (también conocido como Kyi Than), ambos estudiantes de la "Generación 88" y Maung Kan, miembro de la NLD. En una carta dirigida a las autoridades, el Relator Especial había solicitado reunirse con 21 detenidos, así como con Su Su Nway y U Gambira, y había pedido precisiones sobre los cargos que se les imputaban.

9. El Relator Especial se reunió con altas autoridades religiosas estatales, miembros del Comité Estatal Sangha Maha Nayaka (el órgano rector estatal del clero budista), el Monasterio Kya Khat Waing de Bago y la Junta de Síndicos de la pagoda de Shwedagon. Además, visitó dos monasterios (Nan Oo y Ngwe Kyar Yan), donde mantuvo conversaciones sobre los incidentes que se produjeron durante las manifestaciones. Se lo autorizó a reunirse en privado con un grupo de los 92 monjes del monasterio de Ngwe Kyar Yan que habían sido trasladados a otro lugar.

10. El Ministro de Información y Secretario de la Comisión para la Convocatoria de la Convención Nacional, el General de Brigada Kyaw Hsan, informó al Relator Especial acerca de los avances realizados en relación con la hoja de ruta en siete etapas para la transición a la democracia. Tras las etapas primera y segunda, que consistieron en el establecimiento de los principios fundamentales y los principios detallados que debían ser aprobados por la Convención Nacional al redactar la Constitución, se ha llegado ahora a la tercera etapa, que consiste en el establecimiento de una Comisión de redacción de la Constitución. Se indicó que la LND y otros partidos étnicos sólo serán incluidos a partir de la cuarta etapa, en la que está previsto someter el proyecto de constitución a la aprobación de la mayoría mediante un referendo nacional.

El Ministro indicó que 50 de los principios detallados relativos a los derechos humanos se ajustan a las normas internacionales.

11. El Relator Especial observó que el 3 de diciembre, el Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo (SPDC), había concedido la amnistía a 8.552 detenidos, entre ellos 33 extranjeros, para celebrar el inicio de las actividades de la Comisión de Redacción de la Constitución y la finalización de la Convención Nacional. Según ciertas fuentes, entre esas personas se contaban sólo diez presos políticos.

12. El Ministro de Trabajo y Ministro de Enlace con el Secretario General de la NLD valoró positivamente la colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emprendida en 2007 tras la firma de un memorando de entendimiento en el que se preveía un mecanismo para que las víctimas de trabajos forzados pudieran pedir reparación. El Ministro dijo que preveía que el trabajo forzoso sería eliminado en los próximos meses o años. El Ministro se refirió a las repercusiones de las sanciones internacionales en el empleo.

13. El Relator Especial se reunió con la Asociación de Mujeres para el Desarrollo y la Secretaría de la Federación de Asuntos de la Mujer, con la que trató de la contribución de esas entidades a la preparación de los informes que el país debía presentar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y al Comité de los Derechos del Niño. Las entidades no pudieron facilitar al Relator Especial información sobre los casos de mujeres detenidas durante las manifestaciones o a consecuencia de ellas.

II. CAUSAS SUBYACENTES DE LOS SUCESOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2007

14. Desde el golpe militar de 1962, la situación económica de Myanmar no ha dejado de deteriorarse, con lo que se ha vuelto cada vez más difícil para la población satisfacer sus necesidades básicas. A pesar de ser rico en recursos naturales, el país sufre de pobreza generalizada. Su economía, que en años pasados era estable, se ha visto dañada tras varias décadas de políticas económicas desatinadas, corrupción desenfrenada, amiguismo y gastos militares desproporcionados. Un porcentaje significativo de la población ha sufrido un deterioro acusado en su nivel de vida provocado por vulneraciones de los derechos humanos, como el trabajo forzoso, los impuestos arbitrarios y las extorsiones, los traslados forzados y la expropiación de tierras.

15. En los dos últimos años, el Relator Especial ha recibido varios informes en los que se denunciaban medidas represivas adoptadas por el Gobierno contra personas que intentaban organizarse, incluso si sus fines no fueran políticos, sino sociales y económicos. La mala situación económica ha dado lugar a varias manifestaciones y detenciones desde principios de 2007. A lo largo del año se había manifestado la inquietud de la población por la situación económica, incluso antes del importante incremento de los precios de los combustibles que tuvo lugar en agosto. El 22 de febrero, el Gobierno detuvo a nueve personas que habían participado en una manifestación pacífica contra el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Esas personas fueron puestas en libertad sin que se les formularan cargos el 27 de febrero. Entre fines de febrero y abril se produjeron más protestas y detenciones. Desde entonces ha habido movimientos de protesta esporádicos más pequeños en todo el país. En junio, los medios

informaron que un activista del Estado de Rakhine había permanecido detenido durante dos días, tras los cuales fue puesto en libertad, por haber protagonizado una manifestación unipersonal contra la inflación que atrajo a una multitud de curiosos. El 1º de mayo, 33 personas fueron detenidas en relación con dos debates diferentes sobre los derechos de los trabajadores. Aunque la mayoría de esas personas fueron puestas en libertad posteriormente, seis de los organizadores del acto, que tuvo lugar en el Centro Americano, fueron acusados de sedición, constitución de una organización ilegal y contactos con organizaciones ilegales. Thurein Aung, Wai Lin, Myo Min y Kyaw Win fueron condenados cada uno a 28 años de reclusión, mientras que Nyi Nyi Zaw y Kyaw Kyaw fueron condenados a 20 años de prisión cada uno. Todo esto ofrece una clara imagen del clima de represión que reinaba en Myanmar antes de la protesta pacífica de agosto de 2007.

III. LOS HECHOS - CIRCUNSTANCIAS Y PRINCIPALES INCIDENTES

A. Las protestas pacíficas de agosto de 2007

16. El 19 de agosto, a raíz de los aumentos en los precios de los combustibles, varias docenas de personas, entre ellos algunos destacados dirigentes estudiantiles de la "Generación 88" se manifestaron en Yangon de forma pacífica. Durante la semana siguiente se produjeron algunas pequeñas manifestaciones esporádicas y pacíficas en las que intervinieron activistas sociales y políticos, a pesar de la detención de más de 100 personas, entre las que se encontraban casi todos los dirigentes del grupo "Generación 88", el ex Presidente de la Organización para la solidaridad de los trabajadores birmanos y dirigentes de Defensores y Promotores de los Derechos Humanos, antiguos ex presos políticos, estudiantes universitarios, miembros de la NLD y el del Comité de Desarrollo de Myanmar. Las autoridades desplegaron a las milicias SAS que dispersaron rápida y contundentemente todas las reuniones públicas de activistas.

B. El incidente de Pakokku, un punto de inflexión

17. El aumento de los precios del combustible generó importantes protestas, pero la situación no se agravó drásticamente hasta que se utilizó la violencia para acallar una protesta de monjes budistas en Pakokku (división de Magway), a unos 600 km al noroeste de Yangon. La ciudad es un centro religioso muy conocido en Myanmar, situado en una división en la que se ha producido un acusado deterioro de la sostenibilidad de los medios de vida en los últimos diez años.

18. El 5 de septiembre, una manifestación pacífica de monjes budistas que tenía lugar en Pakokku fue violentamente dispersada por la policía y el ejército, así como por las milicias SAS. Al parecer se disparó con munición real por encima de las cabezas de los monjes, y seguidamente miembros de las milicias y de las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente a varios monjes, algunos de los cuales habían sido previamente maniatados. Corrieron rumores de que uno de los monjes había muerto posteriormente, pero el rumor no se confirmó nunca, aunque todo el mundo le dio crédito. Al día siguiente los monjes tomaron como rehenes a unos cuantos oficiales militares que fueron al monasterio, según algunas informaciones, para ordenar a los monjes budistas que dejaran de participar en manifestaciones en contra del Gobierno, y, según otras informaciones, para disculparse ante los monjes. Según se dice, se prendió fuego a algunos vehículos porque los monjes estaban enojados por las detenciones y las palizas que sufrieron algunos monjes durante las protestas pacíficas del día anterior.

19. El 9 de septiembre, un grupo establecido poco antes denominado Alianza de Monjes de toda Birmania (integrada por varias organizaciones existentes de monjes budistas de Myanmar), publicó una declaración en la que se exigía a las autoridades que: a) se disculparan por el incidente de Pakokku; b) redujeran los precios de los productos básicos y el combustible; c) pusieran en libertad a todos los presos políticos, incluida Daw Aung San Suu Kyi y los detenidos por las protestas de los días anteriores; d) entablaran el diálogo con las fuerzas democráticas con el fin de lograr la reconciliación nacional y poner fin a los sufrimientos de la población. En la declaración se indicaba que las autoridades tenían hasta el 17 de septiembre para atender a esas exigencias so pena de sufrir un boicot religioso. La fecha elegida tenía un significado político porque el 18 de septiembre era el aniversario del golpe de 1988 por el que se había instaurado el régimen militar actual.

20. Como el Gobierno no respondió a esas exigencias, el 18 de septiembre se empezaron a organizar grandes manifestaciones pacíficas, dirigidas por monjes, que continuaron los días siguientes, con la participación de seglares. Los monjes también dejaron de prestar servicios religiosos a los militares y sus familias, simbolizados por el "vuelco del cuenco de las limosnas" (en pali "*patam-nikkujjana-kamma*"), que consistió en que varios monjes que participaban en las manifestaciones mostraban sus cuencos de limosnas boca abajo en un gesto emblemático. Esta decisión era especialmente grave porque impedía a los dirigentes militares y a sus familiares hacer méritos, lo cual es una parte muy importante de la vida espiritual y religiosa budista. Los monjes sólo rechazan la limosna en circunstancias extremas desde el punto de vista moral. Con arreglo a las reglas de la disciplina monástica, el Vinaya Pitaka, el boicot fue acordado oficialmente y anunciado en asambleas el 18 de septiembre.

21. Esta no es la primera vez que los monjes budistas se manifiestan en Myanmar. De hecho, existe una larga tradición de militancia social y política en los monasterios del país. Algunas de las revueltas anticoloniales de Myanmar fueron, al menos parcialmente, organizadas y dirigidas por monjes. Los monjes volvieron a participar activamente en el levantamiento en favor de la democracia que se extendió por el país en 1988. El entonces denominado Consejo Estatal encargado de restablecer el orden público (SLORC), lanzó una campaña de represalia; diversos monasterios fueron asaltados y hasta 300 monjes fueron reducidos al estado laical y encarcelados.

22. En esta ocasión, la diferencia más importante era que la participación de los monjes tuvo su origen en las difíciles condiciones de vida impuestas al pueblo de Myanmar. El empeoramiento del nivel de vida está afectando también los medios de vida de los monjes, que se ven obligados a atender a las crecientes peticiones de ayuda de la población con las escasas ofrendas que reciben. Los monasterios se han visto invadidos por indigentes que van en busca del abrigo y los alimentos de las comunidades monásticas, que no han podido asistir a algunas personas porque las contribuciones de los seglares no son suficientes para mantener a los monjes y a los necesitados a los que suelen acoger. Los monasterios son la única red de seguridad social con que cuentan muchas comunidades del país. Aunque las declaraciones de la Alianza de Monjes de Birmania eran claramente políticas desde el comienzo, la mayoría de los monjes insistieron en dejar bien claro que su objetivo al manifestarse en las calles era denunciar las difíciles condiciones socioeconómicas con que se enfrentaban tanto ellos como el resto de la población, y no la imposición de un plan político.

23. Así pues, durante los primeros días de las manifestaciones de los monjes en Yangon que se produjeron después del 18 de septiembre se pidió a la población seglar que se mantuviera al margen de las manifestaciones y que no gritaran consignas políticas. Además de dejar bien claro a las autoridades que las actividades de los monjes tenían su origen en verdaderos agravios sociales y religiosos, era importante conseguir la participación más amplia posible de monjes, incluso los apolíticos y los más conservadores. Sin embargo, a medida que aumentó la escala de las protestas, un grupo de jóvenes monjes activistas se fue poniendo gradualmente a la cabeza de las protestas en las calles. La participación de los estudiantes, los partidos políticos, los grupos de la sociedad civil y la población general en las manifestaciones fue en aumento.

24. La escala de las manifestaciones y el papel de liderazgo asumido por los monjes sorprendieron a todos. En ocasiones anteriores había sido más fácil para las autoridades justificar sus actos como dirigidos no contra los monjes budistas *per se* sino contra los elementos radicales que habían violado el código de disciplina budista al entrar en el terreno político (los que el régimen denomina "falsos monjes"). Aunque no es nada convincente para la mayoría, esa explicación tiene un cierto eco entre los priores y seglares conservadores, que creen que los monjes deberían estar totalmente al margen de los asuntos mundanos. En el caso actual, no sólo fueron particularmente escandalosos tanto el nivel de violencia como las ofensas dirigidas contra los monjes y los monasterios sino que las denuncias básicas de los monjes no tenían carácter político y eran compartidas por la mayoría.

25. Para el Gobierno, según dijo su Ministro de Asuntos Religiosos, fundamentalmente los sucesos de septiembre y octubre tenían su origen en "las maniobras de elementos destructores internos y externos que, envidiosos de la estabilidad y el desarrollo de la nación, quieren dar al traste con la labor realizada por el Gobierno". El Ministro también habló de "Potencias mundiales" a las que no gustaba la Constitución propuesta porque en ella había algunas disposiciones sobre la libre determinación y se prohibía estacionar tropas extranjeras en territorio de Myanmar, y añadió que esas potencias, en connivencia con los "elementos destructores" estaban provocando los "disturbios" actuales¹. El Ministro de Desarrollo Económico y Planificación Nacional dijo al Relator Especial que los precios del combustible en Myanmar seguían siendo más bajos que en los países vecinos y que la subida de los precios de los combustibles se utilizaba contra el Gobierno por motivos políticos. En el anexo se expone en más detalle la opinión del Gobierno sobre las protestas.

C. Las protestas pacíficas de septiembre de 2007 (18 a 25 de septiembre de 2007)

26. Del 18 al 25 de septiembre las protestas pacíficas de los monjes se multiplicaron y se extendieron a otras ciudades del país como Yangon, Mandalay, Pakokku y Sittwe. Aunque se tienen pocas noticias de las manifestaciones organizadas en las provincias, se ha podido verificar un relato detallado de los sucesos de Yangon entre el 18 y el 25 de septiembre usando varias fuentes fiables e independientes. Durante ese período las protestas pacíficas se producían a diario, y eran cada vez más numerosas, pero no fueron inmediatamente reprimidas por las autoridades (véase el anexo).

¹ *The New Light of Myanmar*, 25 de septiembre de 2007.

**D. El uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos
(26 a 29 de septiembre de 2007)**

27. El 26 de septiembre se siguieron produciendo concentraciones de gran número de monjes y seglares. Las fuerzas de seguridad (ejército y policía antidisturbios) así como algunos funcionarios no pertenecientes a las fuerzas del orden, entre los que se encontraban miembros de la USDA y de las SAS, hicieron uso excesivo de la fuerza por primera vez desde los sucesos de Pakokku ya que utilizaron gases lacrimógenos y granadas de humo, y tirachinas (hondas), y propinaron brutales palizas con palos y cañas de bambú y porras de goma, tras las cuales pasaron a disparar balas de goma y munición real. Según un testigo presencial, "las fuerzas de seguridad dispararon primero al aire y luego apuntando a los manifestantes".

28. En algunos testimonios se menciona el uso de gases lacrimógenos. No obstante, según testigos presenciales entrevistados por una fuente independiente, es muy probable que se tratara de granadas de humo, ya que las emanaciones no provocaron las reacciones fisiológicas habituales en los gases lacrimógenos. Según otras fuentes, se utilizaron los dos tipos de granadas. Aunque se ha informado de que había camiones de bomberos en las manifestaciones, no se utilizaron cañones de agua para dispersar a la multitud como se hizo en 1988. Las informaciones de los manifestantes y las fotografías de cartuchos usados que aparecieron en los medios de comunicación parecen indicar que las balas de goma que se utilizaron no eran pelotas de goma sino bolas de metal recubiertas con una capa de goma, munición que puede infligir heridas letales, sobre todo cuando se dispara a corta distancia (menos de 40 m). Hubo muchas detenciones, numerosos heridos (entre ellos monjes y monjas) y, según algunas informaciones, varios muertos (véase el anexo).

IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES

29. Como resultado de las investigaciones realizadas hasta la fecha, el Relator Especial quisiera presentar las siguientes conclusiones preliminares al Consejo de Derechos Humanos, aunque recuerda que su visita no puede considerarse como una misión de esclarecimiento de los hechos propiamente dicha, ya que en una misión de ese tipo deben darse ciertas condiciones, como el acceso independiente a todos los lugares y personas, a fin de verificar la información obtenida.

A. Uso excesivo de la fuerza contra civiles, incluido el uso de fuerza letal innecesaria y desproporcionada

30. El Relator Especial llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad, integradas por el ejército y la policía antidisturbios, hicieron un uso excesivo de la fuerza contra civiles del 26 al 29 de septiembre de 2007, a pesar de que se habían hecho varios llamamientos internacionales en los que se pedía al Gobierno de Myanmar que actuara con moderación al controlar las manifestaciones. Se usó munición real, balas de goma, gas lacrimógeno y granadas de humo, cañas de bambú y palos, porras de goma y tirachinas (hondas). Ello explica en buena medida las muertes y las heridas graves que según algunas informaciones se produjeron. Entre las víctimas había monjes, así como hombres, mujeres y niños que estaban participando directamente en las protestas o las estaban presenciando. En algunos casos se dieron golpes indiscriminadamente, mientras que en otros casos las autoridades se centraron en determinadas

personas, a las que persiguieron para golpearlas. Al menos un manifestante, Ko Ko Win, miembro de la NLD, murió como consecuencia de las heridas que sufrió al ser golpeado cerca de la pagoda de Sule en Yangon el 27 de septiembre. Según algunas informaciones no verificadas, se mató intencionadamente a determinadas personas y se utilizaron francotiradores.

31. En una carta de fecha 1º de noviembre de 2007, el Relator Especial pidió al Gobierno de Myanmar una lista de los fallecidos. El Gobierno ha reconocido la muerte de 15 personas durante las manifestaciones y ha facilitado detalles completos de las causas de esas muertes. No obstante, según algunas informaciones, la cifra de víctimas mortales facilitada por las autoridades puede ser muy inferior a la real. Hasta la fecha, el Relator Especial ha recibido información sobre la muerte de otras 16 personas a consecuencia de la represión de las manifestaciones en septiembre y octubre, que se suman a las 15 personas de la lista facilitada por el Gobierno. El Relator Especial ha comunicado esta información al Gobierno para que la aclare.

32. Según informaciones recibidas y basadas en testimonios de testigos presenciales creíbles, hubo 30 víctimas mortales más en Yangon en relación con las protestas de los días 26 y 27 de septiembre de 2007, sobre todo el 27 de septiembre y en los alrededores de la pagoda de Sule. No se tiene noticia de muertes durante las manifestaciones que tuvieron lugar fuera de Yangon. Según fuentes diplomáticas más de 500 manifestantes siguen detenidos en Yangon, Mandalay, Sittwe, Mytkyina y Mawlamyine.

33. Una de las personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones fue el periodista gráfico japonés Kenji Nagai. Las imágenes de la muerte del Sr. Nagai grabadas por las cámaras de televisión permiten sospechar que murió por disparos dirigidos contra él a corta distancia, y no por haberse encontrado en el fuego cruzado de las fuerzas de seguridad. Aunque el organismo de la policía metropolitana de Tokio realizó la autopsia del cadáver del Sr. Nagai el 4 de octubre en la Universidad de Kyorin (ciudad de Mitaka, Tokio)², el Relator Especial también recibió el certificado de la autopsia del crematorio de Htain Bin.

34. Durante su visita al crematorio de Htain Bin, las autoridades informaron al Relator Especial de que, durante los disturbios de septiembre, el Hospital General de Yangon trasladó al crematorio 14 cadáveres, con sus correspondientes certificados de inhumación. Los cadáveres fueron debidamente registrados y posteriormente incinerados. El hospital certificó 11 muertes por heridas (principalmente de arma de fuego), 2 por enfermedad y 1 por ahogamiento. El crematorio no pudo identificar 3 cadáveres. Las familias y parientes de los cadáveres identificados pudieron, según se dice, participar en la incineración. Los cadáveres no identificados fueron incinerados el 1º de octubre. Se señaló que cada día se incineraba a unos 25 cadáveres en ese crematorio y que sólo se recibían cadáveres del Hospital General. Aunque se dijo al Relator Especial que entre los 14 cadáveres no había ningún monje, en las fotografías no había ninguna indicación que lo confirmara. Las fotografías y certificados de inhumación del registro se pusieron a disposición del Relator Especial.

² *Sankei News*, 5 de octubre de 2007.

35. A pesar de haberlo solicitado, el Relator Especial no tuvo acceso al segundo crematorio de Yangon, el crematorio de Ye Way, que está controlado por el Departamento Central y el Contralor de la Policía, donde, según fuentes dignas de crédito, los días 27 a 30 de septiembre se incineró un gran número de cadáveres (envueltos en sacos de plástico y de arroz) de noche, entre las 4.00 y las 8.00 horas. Según algunas fuentes, no era práctica habitual del crematorio funcionar durante esas horas, que se ordenara a los empleados normales que no estuvieran presentes y que, esas noches, las instalaciones estuvieran a cargo de personal de la seguridad del Estado o grupos apoyados por el Estado. Según, al menos, una información, algunos de los cadáveres que se incineraron tenían la cabeza rapada, y algunos presentaban señales de heridas graves. El Relator Especial expresó su preocupación al Gobierno por esas informaciones y espera que en investigaciones futuras se esclarezcan esas supuestas incineraciones durante las noches de los incidentes de Yangon. Los restos mortales de los difuntos deberían devolverse a las familias o a sus allegados a fin de que éstos puedan celebrar las ceremonias fúnebres propias de su religión o creencias.

36. El Relator Especial preguntó a autoridades del Hospital General cuántos manifestantes habían resultado heridos, en vista de que, según se había informado, sólo se atendió a los manifestantes en el hospital público. El Hospital General había registrado 30 ingresos en Yangon, 23 de los cuales eran accidentes y urgencias. Según la lista, que fue facilitada al Relator Especial tras obtener la autorización de la capital, los pacientes presentaban heridas de bala y lesiones diversas. El Relator Especial preguntó si los heridos estaban detenidos. Una vez pasados por la sala de urgencias y tras ser remitidos a las salas generales, algunos fueron dados de alta. La información también se facilitó a las fuerzas de seguridad que interrogaron a los pacientes en el hospital.

37. El uso de medios letales por las fuerzas del orden del 26 al 29 de septiembre de 2007 en Myanmar es incompatible con los principios fundamentales enunciados en las normas internacionales básicas derivadas del derecho consuetudinario internacional³. Se hizo caso omiso de los principios de necesidad y proporcionalidad que se enuncian en el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y su comentario. Según el artículo 3 "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas". En el comentario anexo a esta disposición se aclara que "En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr". Análogamente, en los Principios Básicos para el empleo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en la declaración de carácter más general sobre el uso de la fuerza letal, el principio 9, se dispone que: "En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida." Teniendo en cuenta que en el Código de Procedimiento Penal de Myanmar se prevé el uso de fuerza civil (art. 128) y de fuerza militar (art. 129) para dispersar una reunión, también se dispone que se usará sólo la fuerza necesaria para disolver una concentración de

³ Los principios de las normas de derechos humanos internacionales aplicables en esos contextos se basan principalmente en el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en los Principios Básicos para el empleo de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

personas a fin de evitar "daños a las personas y a los bienes" (art. 130). Del 26 al 29 de septiembre las fuerzas de seguridad sobrepasaron, sin duda, los límites que les imponía la ley.

38. El Relator Especial concluyó que si bien el Gobierno y sus agentes mostraron una cierta diligencia para evitar una matanza, la decisión de las fuerzas de seguridad de tirar a matar y de golpear brutalmente a los manifestantes provocándoles la muerte constituye una privación arbitraria de la vida y viola el derecho a la vida, pues la fuerza letal usada era innecesaria y desproporcionada.

B. El empleo de agentes de represión no oficiales

39. El Relator Especial considera que la participación de miembros de la Asociación para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDA) y de la milicia SAS contribuyó en gran medida al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos. Es lamentable que el Código de Procedimiento Penal de Myanmar prevea el uso por las autoridades de fuerzas civiles para dispersar reuniones (art. 128). Además de los soldados y la policía antidisturbios del Gobierno, los miembros de la USDA y de la milicia Swan Ah Shin (SAS), respaldados por el Gobierno, actuaron violentamente contra los manifestantes, con la aquiescencia o aprobación del Gobierno. No está claro si ese grupo actuó por orden directa del Gobierno. Hay indicios de que las autoridades de Myanmar han sido cómplices en los abusos perpetrados por esos grupos, o negligentes al no intervenir, y al no castigar a esos grupos o impedir su actuación

40. La USDA fue creada por el Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo (SPDC) en 1993, y en 2006 anunció su intención de constituirse en partido político y de presentar candidatos a las próximas elecciones. El Relator Especial había expresado sus preocupaciones en informes anteriores respecto de diversas alegaciones de participación de miembros de la USDA en actos de violencia política y delictiva. La existencia de la SAS se comunicó por primera vez en 2003, cuando presuntamente participaron en los acontecimientos trágicos de Depayin⁴. Según las fuentes, la SAS ya estuvo envuelta en incidentes en 1997. Esta milicia, que carece de condición jurídica, es una fuerza de base integrada por civiles que al parecer ayudan a las autoridades prestando servicios paramilitares, de represión y de inteligencia militar, sin figurar en la nómina del Gobierno. Está compuesta por miembros del cuerpo de bomberos, organizaciones de primeros auxilios, organizaciones de mujeres y la USDA, así como por delincuentes y reclusos puestos en libertad, miembros de bandas locales, indigentes y desempleados.

C. Detención y arresto arbitrarios

41. Entre el 18 de septiembre y el final del toque de queda el 20 de octubre hubo detenciones diarias, que llegaron a ser masivas los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Cabe subrayar que desde que se levantó el toque de queda el 20 de octubre, el Relator Especial sigue recibiendo informes de nuevas detenciones, así como de puestas en libertad. Tras examinar diversos informes y testimonios, se estima que en los meses de septiembre y octubre se arrestó a entre 3.000 y 4.000 personas, y que en el momento de redactar el presente informe se hallaban todavía detenidas entre 500 y 1.000 personas. Además, no se ha puesto en libertad

⁴ La matanza de Depayin tuvo lugar el 30 de mayo de 2003; al menos 70 personas asociadas a la NLD fueron muertas al parecer por una banda respaldada por el Gobierno.

a 1.150 presos políticos detenidos antes de las manifestaciones. La mayoría de las detenciones tuvieron lugar durante la operación de represión de las manifestaciones y las redadas nocturnas realizadas por las fuerzas de seguridad y por agentes de represión no oficiales (la USDA y la SAS). El análisis de varios informes fidedignos ha reforzado la opinión de los Relatores Especiales de que los familiares de personas que estaban en la clandestinidad también fueron tomados como rehenes durante las redadas. En el contexto de los preparativos de su visita, en carta de fecha 1º de noviembre de 2007 dirigida al Gobierno, el Relator Especial pidió las listas de las personas detenidas, de las personas puestas en libertad y de las que aún se hallaban detenidas, incluida información sobre sus paraderos, sus condiciones de detención y los cargos imputados. Preguntó además en virtud de qué ley estaban bajo custodia.

42. El Ministro del Interior informó al Relator Especial de que 2.927 personas habían sido detenidas con fines de investigación desde el comienzo de la campaña de represión en septiembre de 2007, y que de ellas 2.836 habían sido puestas en libertad y 91 seguían detenidas. La mayoría estaban detenidas con cargos de terrorismo según el Código Penal, mientras que otras se hallaban todavía bajo investigación. Al menos 15 detenidos en relación con las manifestaciones pacíficas desde agosto habían sido condenados a penas de prisión de hasta nueve años y medio. Cinco de ellos al parecer habían sido juzgados, probablemente a puerta cerrada y con procedimiento muy viciado, en un tribunal dentro de la cárcel de Thayet, División de Magway, los días 24 y 26 de septiembre según fuentes solventes. Debe señalarse que el Relator Especial no ha podido verificar las cifras reunidas.

43. El Relator Especial está particularmente preocupado por las numerosas informaciones acerca de la existencia de centros de detención no oficiales de gran capacidad, no reconocidos por las autoridades del Estado, que se consideran instalaciones "secretas". Entre los detenidos han figurado niños y mujeres embarazadas. Según diversos informes, se ha mantenido a personas en seis lugares de detención, a saber, el Instituto de Tecnología del Gobierno (GTI) en la municipalidad de Insein, la comisaría de policía N° 7 en la municipalidad de Thanyin, Aung Tha Paye en la municipalidad de Mayangone, la comisaría N° 5 de la policía antidisturbios de la municipalidad de Hmawbe, la comisaría de policía Plate Myot de Mandalay y el Centro de Interrogatorios Kyaik Ka San en la municipalidad de Tamwe. Como muchas personas han sido puestas en libertad, se cree que los restantes detenidos se hallan bajo custodia en unos pocos lugares de detención, entre ellos el GTI y la comisaría de policía N° 7, lugares que el Relator Especial visitó durante su misión oficial.

44. Durante su visita al GTI, el Relator Especial fue informado por la policía de que entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre las fuerzas de seguridad habían apresado allí a 1.930 manifestantes (bajo la responsabilidad de la Comunidad de Yangon desde julio de 2007), de los cuales 80 habían sido enviados a la cárcel de Insein como infractores de las leyes de seguridad. Los demás habían sido al parecer puestos en libertad de inmediato. El Relator Especial recibió un mapa detallado de las celdas que había visitado (hombres y mujeres estaban separados). Fue informado de que el GTI, que ya no era una escuela técnica, se transformaría en un refugio para casos de emergencia (en coordinación con la Cruz Roja de Myanmar). Aunque el GTI tenía cabida para sólo 1.500 personas a la vez, funcionarios del Gobierno le informaron de que habían enviado 2.500 mantas; según se dijo, 488 personas habían estado enfermas, a cargo de 5 médicos y 15 enfermeras; y cinco personas habían sido trasladadas de urgencia al Hospital General. El Relator Especial visitó las celdas donde habían estado detenidos 140 hombres y 153 mujeres (70 por celda). Cien policías se habían encargado de la seguridad. Se

notificó al Relator Especial que la información sobre las lesiones y las investigaciones de los detenidos era confidencial.

45. El Relator Especial también agradeció el permiso de entrar en la sede del Comando de Control del Batallón de Policía N° 7 de Kyauktan, en la municipalidad de Thanyin, a unos 60 km de Yangon. Según informes, las personas que eran traídas a ese lugar permanecían poco tiempo allí, ya que la capacidad máxima era de 30 personas a la vez. Ese centro está bajo el control del Batallón de Fuerzas de Seguridad de la municipalidad del Distrito Sur, y su principal actividad es la escolta de personalidades para las embajadas, la seguridad en Nay Pyi Taw y el control en las zonas fronterizas. El Relator Especial preguntó por su participación en actividades de orden público, a lo que respondieron que eran los encargados de recibir a los detenidos que enviaban otras fuerzas de seguridad. A la pregunta de por qué los sospechosos eran enviados a una zona tan remota y aislada, se le respondió que ese centro abarcaba la zona central de Yangon. Las autoridades indicaron que los participantes en manifestaciones serían separados, interrogados e investigados. Cuando preguntó quién interrogaría a los detenidos, las autoridades respondieron que ese no era un lugar de interrogatorios, sino sólo de investigaciones. Al parecer no había heridos y todas las personas traídas a Kyauktan habían sido devueltas, si bien no se especificó adonde. Pese a haberlo solicitado, el Relator Especial no obtuvo el acceso a los expedientes, para lo cual se requería el visto bueno del Ministro del Interior y el Jefe de Policía.

46. El Relator Especial fue informado de que 10.000 reclusos estaban internados en la cárcel de Insein bajo la custodia de 500 guardianes, y que 70 detenidos se hallaban al parecer en un edificio separado. Los reclusos recibían visitas de amigos y familiares, medicamentos, paquetes y periódicos, pero sólo tenían permiso para escribir cartas. La mayoría de ellos necesitaba cuidados médicos y tenía mala salud por las condiciones de la cárcel. Muchos de los estudiantes de la Generación 88 se hallaban en un estado de debilidad tal que apenas podían caminar. El Relator Especial observó que la mayoría de los presos políticos de la NLD y del Grupo de la Generación 88, al igual que los monjes, eran considerados terroristas por las autoridades y habían sido perseguidos en aplicación de la ley sobre seguridad. Numerosos presos políticos se hallaban en el denominado Dormitorio Anexo 5 de Insein, donde al parecer ni siquiera los guardianes tenían permiso para entrar (en la celda N° 8 había 70 personas). El Relator Especial recibió fotos del lugar tomadas por satélites comerciales. Min Ko Naing había sido presuntamente internado en el Anexo un día antes de la llegada del Relator Especial a la cárcel de Insein. En ese dormitorio se hallaban también Htay Kywe, Min Zeya, Mie Mie, Mya Aye, Aung Thu, Ko Ko Gyi, Aung Naing, U Pyi Kyaw y U Zin Payit.

47. Según fuentes fidedignas, los detenidos eran mantenidos en condiciones degradantes en una zona de castigo especial de la cárcel de Insein conocida comúnmente como las "casetas de los perros del ejército", un complejo de nueve celdas de aislamiento minúsculas de 2 x 2 metros, permanentemente custodiadas por 30 perros. Las celdas no tenían ventilación ni retrete, los detenidos (en su mayoría presos políticos) tenían que dormir sobre una estera delgada en el suelo de cemento y sólo podían lavarse con agua fría cinco minutos cada tres días. Un preso puesto en libertad hacía poco había testificado que le habían obligado a ponerse de rodillas en ladrillos rotos y a mantenerse de puntillas por largos ratos. Otros informes confirmaban que los monjes detenidos habían sido despojados de sus hábitos y obligados a comer por la tarde, cuando no podían hacerlo por motivos religiosos.

48. Los grupos de seguridad del Estado han seguido buscando y capturando a personas sospechosas de haber participado en las manifestaciones contra el Gobierno, principalmente mediante allanamientos nocturnos de las casas. También se ha confirmado que las autoridades han recurrido al arresto arbitrario e ilegal de familiares o amigos cercanos y de sospechosos partidarios de manifestantes que estaban en la clandestinidad. Esto constituye una toma de rehenes -una presión explícita o implícita sobre los manifestantes sospechosos para que se presenten, como condición para la liberación o incolumidad del rehén. Se trata de una violación de las normas fundamentales del derecho internacional. Por ejemplo, antes de la detención de Thet Thet Aung el 19 de octubre, su madre y su suegra, por lo demás no buscadas por las autoridades, fueron arrestadas arbitrariamente, al parecer para intimidar y presionar a Thet Thet Aung a fin de que se presentara. Las dos mujeres fueron puestas después en libertad, pero la madre siguió detenida hasta el 2 de noviembre. De la misma manera, antes del arresto del poeta Ko Nyein Thit por las autoridades de Myanmar, su esposa Khin Mar Lar fue detenida el 1º de octubre y puesta en libertad el 21 de octubre. Cuando Di Nyein Lin eludió el arresto el 12 de octubre, el propietario de la casa donde estaba escondido, Thein Aye, fue arbitrariamente detenido. Di Nyein Lin fue arrestado el 23 de octubre y Thein Aye seguía privado de libertad.

49. El Relator Especial recibió denuncias que indicaban que 106 mujeres, incluidas 6 religiosas, permanecían en prisión en Yangon tras su detención en relación con las manifestaciones de septiembre. Desearía elogiar a las más de 25 mujeres activistas que desfilaron en el centro de Yangon el 26 de noviembre en la primera manifestación pública de oposición al régimen militar desde la campaña de represión de septiembre, organizada en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El grupo, entre quienes se contaban amas de casa y estudiantes, desfilaron desde la pagoda de Sule hasta la pagoda de Batataung, en donde oraron en memoria de los monjes y otros manifestantes que murieron en las manifestaciones de septiembre y por la liberación de los detenidos. Las mujeres eran seguidas de cerca por miembros de la USDA, que cuenta con el apoyo del Gobierno, y las milicias SAS, aunque no intervinieron.

50. El 20 de noviembre, una semana después de la visita del Relator Especial y su llamamiento para que se pusiera en libertad a todos los presos políticos de conformidad con su plan de acción propuesto en su último informe a la Asamblea General (A/62/223), se habían puesto en libertad a 58 presos por razones humanitarias, según una declaración del Gobierno. En ella se decía que se había liberado a 9 hombres mayores de 65 años y a 49 mujeres, embarazadas o con niños. No se aclaró si se trataba de presos políticos y no se mencionó a la dirigente pro democracia Daw Aung San Suu Kyi. Según la declaración "el Gobierno seguirá poniendo en libertad a quienes no causen ningún daño a la comunidad ni amenacen la actual paz, estabilidad y unidad de la nación mientras el país avanza con firmeza hacia la democracia."

51. No obstante, el Relator Especial condena las nuevas detenciones de activistas políticos, pese al compromiso asumido a comienzos de noviembre por el Primer Ministro Thein Sein al Asesor Especial del Secretario General para Myanmar, Ibrahim Gambari, de que no se llevarían a cabo más detenciones. Informes fidedignos confirman que se han producido las siguientes detenciones desde comienzos de noviembre: U Gambira, jefe de la Alianza de Todos los Monjes Birmanos y uno de los dirigentes de las protestas de septiembre, su padre, Min Lwin, y su hermano, Aung Kyaw Kyaw, previamente detenidos como rehenes en un intento por sacarlo de la clandestinidad; Su Su Nway, miembro del ala joven de la NLD y el joven activista

Bo Bo Win Hlaing. Las autoridades asaltaron un monasterio en el estado occidental de Rakhine y detuvieron al monje U Than Rama, buscado por su participación en las protestas de septiembre y con paradero desconocido. Se detuvo a Myint Naing, miembro destacado de la NLD. También se detuvo al dirigente de origen étnico arkanés U Tin Ohn y su paradero es desconocido. Otros dirigentes étnicos, incluido el arkanés Cin Sian Thang y U Aye Thar Aung, Naing Ngwe Thein, del Frente Democrático Nacional Mon, y el dirigente político kachín U Hkun Htoo, fueron objeto de una redada, pero se les liberó después de ser interrogados. Aung Zaw Oo, miembro del grupo Defensores y Promotores de los Derechos Humanos, fue detenido en Yangon, presumiblemente debido a su participación en la planificación de los acontecimientos del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Fueron detenidas otras tres personas, a saber, Win Maw, guitarrista principal del popular grupo musical Shwe Thansin, Myat San, miembro del Grupo de Estudiantes Tricolor, y Aung Aung, amigo de los otros dos. Además, fueron detenidos ocho miembros de la Organización para la Independencia Kachin (KIO) en Daw Hpum Yang, en el municipio de Momauk, distrito de Bamaw. Se cree que ello se debió al hecho de que la KIO se negó a acceder a la petición del SPDC de que se desvinculara públicamente de las declaraciones recientes de Daw Aung San Suu Kyi, que el Asesor Especial, Sr. Gambari, había hecho públicas.

52. Por consiguiente, el Relator Especial hace un llamamiento urgente al Gobierno de Myanmar para que ponga en libertad a todas las personas detenidas o encarceladas por el mero hecho de haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, lo que incluye tanto los presos de conciencia de larga data como los recientes, así como los detenidos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, y que se abstenga de practicar más detenciones. Observa con grave preocupación el persistente empleo de la detención arbitraria por las autoridades contra los presos de conciencia, incluida Daw Aung San Suu Kyi, U Win Tin e importantes miembros de la oposición pertenecientes a grupos minoritarios étnicos, como U Khun Htun Oo. Se ha confirmado que la liberación de muchos detenidos hasta la fecha ha estado supeditada a la condición de que éstos firmen un acuerdo por el que se abstengan de proseguir su actividad política.

D. Desapariciones

53. En su investigación realizada hasta la fecha, el Relator Especial ha tomado conocimiento de por lo menos 74 casos de desapariciones forzadas en que las autoridades de Myanmar no están en condiciones o no están dispuestas a determinar el paradero de las personas de quienes hay motivos razonables para creer que fueron detenidas por agentes estatales. Las cifras proporcionadas por distintas fuentes pueden ser inferiores a las reales dado que no todos los familiares informan sobre las personas desaparecidas por temor a represalias y castigos graves. El Relator Especial mantuvo un diálogo con las autoridades durante su misión y les solicitó que revelaran información sobre la suerte y el paradero de las personas en cuestión. Las autoridades respondieron sólo parcialmente.

54. Es sumamente perturbadora la denuncia de la quema de una gran cantidad de cadáveres, como se documentó anteriormente. Si bien en esta etapa no se expresa una opinión sobre la exactitud de esos informes, la denuncia merece una atención especial puesto que puede explicar por qué el Gobierno no ha podido hasta la fecha presentar información sobre el paradero de algunos detenidos y desaparecidos. También puede explicar los numerosos informes recibidos

sobre la retirada de cadáveres por las fuerzas de seguridad durante las ofensivas y redadas nocturnas en algunos monasterios.

E. Muerte en prisión

55. Según informes creíbles recibidos de una fuente independiente, un monje que había estado en el centro de detención del GTI del 27 de septiembre al 5 de octubre informó de que en ese período alrededor de 14 personas habían muerto en prisión, incluidos 8 monjes y 1 niño que fallecieron el primer día. Según el monje, que estuvo detenido en una celda junto a cientos de personas, las muertes se debieron más a las malas condiciones de detención que a las lesiones sufridas durante la operación de represión. El miembro de la NLD Win Shwe, detenido el 26 de septiembre cerca de Mandalay, supuestamente falleció durante el interrogatorio en el centro policial Plate Myot el 9 de octubre. Su cuerpo no fue devuelto a la familia. Análogamente, el venerable U. Thilavantha, abad adjunto del monasterio de Yuzana Kyaungthai en Myitkyina, presuntamente murió el 26 de septiembre a causa de los golpes propinados mientras estaba detenido, tras haber sido golpeado también la noche anterior durante un asalto al monasterio.

F. Tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura

56. Cada vez son más frecuentes las denuncias de personas puestas en libertad que describen las condiciones de detención degradantes y la práctica de la tortura. La impresión general del Relator Especial es que los detenidos hacen frente a duras condiciones durante la fase del interrogatorio, que dura de cuatro a ocho días y se realiza en locales distintos de los lugares de detención (como la Oficina de la Comisión Fiscal y el Ministerio del Interior de Yangon). En muchos interrogatorios los detenidos están esposados y duermen sobre pisos fríos y mojados. Se les ofrece comida y bebida según sean las respuestas que dan. Se mantiene a algunos presos en condiciones de aislamiento y sólo disponen de una hora de ejercicios ya sea en la mañana o en la tarde (estos períodos se ampliaron a una hora y media durante la visita del Relator Especial).

57. La práctica de la tortura en Myanmar ha sido documentada por distintos observadores, en particular el Relator Especial, durante los últimos siete años. La experiencia demuestra que esta práctica ha estado particularmente dirigida a los activistas políticos y los defensores de los derechos humanos durante su detención, interrogatorio y encarcelamiento. Las denuncias han confirmado que existen condiciones de detención deplorables que no cumplen con las normas internacionales sobre el trato a los presos, y que de hecho equivalen a un trato cruel, inhumano y degradante prohibido por el derecho internacional. Desde la campaña de represión ha aumentado el número de denuncias de muerte en prisión, así como de golpizas, malos tratos, y falta de alimentos, agua o tratamiento médico en unas instalaciones penitenciarias antihigiénicas y superpobladas en todo el país. No se han atendido las necesidades básicas, en particular de alimentos, agua, frazadas y acceso a un espacio para dormir y a instalaciones sanitarias.

G. Duras represalias contra manifestantes pacíficos

58. En su último informe a la Asamblea General (A/62/223), el Relator Especial dedicó una atención particular a las constantes restricciones del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la libertad de circulación. Los sucesos de septiembre y octubre de 2007 fueron otra manifestación de los duros métodos de persecución y hostigamiento que imperan en Myanmar. Entre el 26 de septiembre y el 20 de octubre se aplicó

estrictamente la prohibición de reunirse (grupos de cinco o más personas) establecida en la legislación de Myanmar, y se decretó un toque de queda que limitaba seriamente la libertad de circulación de las personas, lo cual facilitó las incursiones nocturnas efectuadas por las fuerzas de seguridad.

59. Se tiene noticia de que las incursiones nocturnas se llevaron a cabo durante las horas del toque de queda. En la noche del 26 de septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Myint Thein, portavoz del partido político de la oposición encabezado por Daw Aung San Suu Kyi. Al parecer, durante estas incursiones se toma como rehenes a los familiares de las personas que operan en la clandestinidad. La reducción del toque de queda decretada el 2 de octubre no ha afectado a estos incidentes, que presuntamente tienen lugar entre las 23.00 y las 3.00 horas.

60. Se tiene noticia de que, entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, las fuerzas de seguridad asaltaron 52 monasterios en todo el país, robando las pertenencias de los monjes, y golpeando y llevándose detenidos a muchos de ellos. Al parecer, también hubo muertos. A las 0.30 horas del jueves 27 de septiembre, las fuerzas de seguridad asaltaron el monasterio de Ngwe Kyar Yan, un conocido centro de formación budista de Yangon (municipalidad de Okkalapa meridional), donde presuntamente abrieron fuego, y agredieron físicamente y detuvieron a unos 70 monjes. En las imágenes tomadas en el lugar después del toque de queda se ven manchas de sangre en distintas zonas del monasterio y el destrozo de elementos como puertas, ventanas y muebles. Las imágenes también parecen indicar que se produjeron saqueos, algo que afirman diversas fuentes, entre ellas testigos directos. Según declaraciones sin confirmar, algunos de los monjes abandonaron el lugar tras la violenta incursión y denunciaron varias detenciones y la retirada de los cadáveres de varios monjes a quienes las fuerzas de seguridad habrían matado a golpes. Más tarde, ese mismo día, Ngwe Kyar Yan fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la población civil. Soldados y civiles rodearon el monasterio desde el final de la tarde hasta la noche, y se oyeron disparos.

61. El Relator Especial fue acompañado hasta el monasterio de Ngwe Kyar Yan, que estaba vacío, pero no se le dejó entrar. Las autoridades le mostraron imágenes de objetos (armas, carteles difamatorios, artículos de juego e imágenes pornográficas) que presuntamente se habrían encontrado en el monasterio. El número total de monjes que en un principio estaban alojados en el monasterio era de entre 180 y 200. Se informó al Relator Especial que el 27 de septiembre se había trasladado a 92 monjes a otro monasterio bajo la responsabilidad del Estado, aunque no detenidos. En el último día de su visita, el Relator pudo reunirse en privado con 10 de esos 92 monjes restantes. El Relator Especial está preocupado por el paradero de los demás monjes, que a decir de las autoridades habrían huido y regresado con sus familias (supuestamente tras haber sido expulsados a causa de su conducta, pues el código disciplinario de los monjes obliga a obtener el permiso del superior para poder abandonar el monasterio). El Relator Especial señaló que volvería a visitar a los monjes en su misión de seguimiento.

62. Las autoridades anunciaron que, al 5 de octubre, habían detenido a 533 monjes, de los cuales 398 habían sido puestos en libertad una vez que se hubo determinado quiénes eran monjes auténticos y quiénes falsos, según los términos empleados por las autoridades. Al parecer, hay 21 monjes encarcelados en la prisión de Insein. Sin embargo, fuentes fiables creen que hay muchos más presos o desaparecidos. Muchos monjes jóvenes que estudiaban literatura budista no se han atrevido a regresar a Yangon, pues los monasterios siguen vigilados por las autoridades y los que estaban vacíos han sido ocupados por miembros de la USDA, quienes se

convirtieron en fideicomisarios con efecto inmediato tras la campaña de represión. Ha habido controles sorpresivos en monasterios sujetos a la vigilancia de las autoridades locales. El 29 de noviembre, los militares obligaron a los monjes que se ocupaban de pacientes con VIH/SIDA a abandonar el monasterio de Maggin, que fue cerrado por las autoridades.

V. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y SUS AGENTES

63. El Estado y sus agentes tuvieron varias oportunidades para entablar un diálogo con los manifestantes pacíficos, con el fin de hallar una salida pacífica al conflicto. En lugar de estudiar cuáles eran las mejores opciones a su alcance para contener las protestas, y a pesar de varios llamamientos internacionales, el Estado y sus agentes optaron por la represión. El Estado y sus agentes deberían haber tratado de encontrar y abordar las causas subyacentes de las manifestaciones pacíficas antes de recurrir a la fuerza para dispersar a los manifestantes. Como último recurso, el uso de la fuerza no debía haber superado los límites establecidos en las normas acordadas internacionalmente para el control de manifestaciones.

64. Aunque en la fase actual de la investigación es difícil determinar con claridad cuál fue la cadena de mando que llevó a los trágicos sucesos de septiembre y octubre de 2007, el Relator Especial concluyó que el Gobierno sabía que era probable que fueran a cometerse graves violaciones de los derechos humanos, pero no las impidió porque no utilizó todas las opciones a su alcance y no hizo prueba de moderación en el control de las manifestaciones. El Relator Especial también determinó que la represión de las manifestaciones no había sido una acción policial sino una respuesta militar. El Relator Especial señaló que el uso excesivo de la fuerza, incluida la fuerza letal, había sido innecesario y desproporcionado. También estimó que había tenido lugar una campaña despiadada de represalias contra monjes, monjas, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y otras personas que habían organizado las manifestaciones pacíficas o participado en ellas, así como contra sus familiares.

65. En su anuncio N° 1/2007, de 4 de octubre de 2007, el Comité de Información del SPDC destacó que la politización de las reivindicaciones de los monjes por los partidos políticos y otras organizaciones había generado agitación⁵. La opinión de que las manifestaciones pacíficas del pasado agosto han sido la causa de la agitación es difícil de aceptar a la vista de cómo se sucedieron los hechos. Parecería más acertado decir que el estado de desorden y los disturbios violentos fueron el resultado del uso excesivo de la fuerza por el Estado y sus agentes. Se considera que las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario dan lugar a responsabilidad penal individual. Al no haber impedido estas violaciones graves, recae sobre el Gobierno la responsabilidad de investigarlas a fondo, enjuiciar a sus autores y, si se determina la culpabilidad de éstos, imponerles un castigo.

66. Según lo afirmado por una fuente fidedigna, en la represión de las manifestaciones de Yangon participaron, además de la policía antidisturbios, las siguientes fuerzas militares sujetas a la autoridad de la Oficina de Operaciones Especiales N° 5, encargada de supervisar el Mando Militar de Yangon y las unidades que dependen de él:

⁵ *The New Light of Myanmar*, 5 de octubre de 2007.

- i) Oficina de Operaciones Especiales N° 5 (comandante: Teniente General Myint Swe);
- ii) Mando Militar de Yangon (comandante: General de División Hla Htay Win, comandante adjunto: General de Brigada Kyaw Kyaw Tun; comandante de la Guarnición Militar N° 1: General de Brigada Myin Soe; comandante de la Guarnición Militar N° 2: Coronel Tin Tun; comandante de la Guarnición Militar N° 3: Coronel Hla Aye);
- iii) 11ª División de Infantería Ligera (comandante: General de Brigada Hla Min, comandante de la Unidad Táctica N° 111: Coronel Myat Thu; comandante de la Unidad Táctica N° 112: Coronel Htein Lin; comandante de la Unidad Táctica N° 113: Teniente Coronel Tun Hla Aung);
- iv) 66ª División de Infantería Ligera (comandante: Coronel Maung Maung Aye, comandante de la Unidad Táctica N° 661: Coronel Htwe Hla; comandante de la Unidad Táctica N° 662: desconocido; comandante de la Unidad Táctica N° 663: Coronel Han Nyunt); y
- v) 77ª División de Infantería Ligera (comandante: General de Brigada Win Myint; comandante de la Unidad Táctica N° 771: Teniente Coronel Mya Win).

67. Desafortunadamente, y a pesar de haberlo solicitado, el Relator Especial no pudo reunirse con los mandos militares implicados en las operaciones de represión. Es necesario seguir investigando para verificar las denuncias mencionadas, comunicadas por fuentes diferentes, así como identificar los efectivos y mandos militares que participaron en las operaciones de represión en otras partes del país, en particular Mandalay, Pakokku y Sittwe. El Relator Especial agradecería a las autoridades que le facilitasen datos sobre el despliegue de fuerzas de seguridad bajo la autoridad de mandos militares (momento, lugar y número de miembros de las fuerzas de seguridad), el tipo de armas con que iban equipadas, las órdenes que recibieron los mandos militares, y en particular quién dio la orden de disparar con munición real.

68. En el momento de redactar este informe, el Relator Especial no ha recibido las seguridades del Gobierno de Myanmar de que los culpables de violaciones de los derechos humanos vayan a ser juzgados y de que las víctimas vayan a recibir una reparación.

VI. CONCLUSIÓN

69. El Relator Especial ha transmitido este informe y una lista con los nombres de 653 presos, 74 desaparecidos y 16 fallecidos (además de la lista de 15 fallecidos facilitada por las autoridades) al Gobierno de Myanmar para que formule observaciones. En la lista figuran sólo los incidentes en los que se citan los nombres de las personas implicadas. El Relator Especial también ha transmitido al Gobierno información sobre algunos incidentes en los que no se citaba nombre alguno, pero en los que habrían muerto grupos de personas. Esta lista se actualizará periódicamente y servirá de base para el diálogo entablado con las autoridades.

70. El Relator Especial espera que se produzca un cambio positivo a raíz de la colaboración de Myanmar con sus interlocutores internacionales y regionales, en particular mediante la Carta de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), firmada por Myanmar, en la que se recoge un firme compromiso con los derechos humanos y los principios humanitarios y se promete la creación en la ASEAN de un órgano dedicado exclusivamente a los derechos humanos. El Relator Especial también desea reiterar su firme llamamiento a las autoridades para que vuelvan a colaborar con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) permitiéndole acceder libremente a los centros penitenciarios.

71. Los incidentes denunciados revelan la vulnerabilidad de los cimientos económicos y sociales de la sociedad de Myanmar. Demuestran que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica todavía no están garantizados plenamente, y que Myanmar tiene ante sí la muy difícil tarea de garantizar el respeto de la legalidad, haciendo responsables a los autores de los graves actos delictivos que se documentan en el presente informe. También revelan la necesidad urgente de derogar leyes antiguas o enmendarlas para ponerlas en conformidad con la normativa internacional de derechos humanos, así como de recapacitar sobre la participación del ejército y de personal no perteneciente a las fuerzas del orden en las operaciones de control de manifestaciones.

72. Asimismo, estos sucesos constituyen un ejemplo patente de la indivisibilidad de los derechos humanos. Las décadas de denegación de los derechos civiles y políticos básicos han puesto en peligro el nivel de vida de la población. Al restringir severamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión pacífica, el Gobierno ha impedido durante muchos años la formación de una plataforma para el diálogo público genuino que permita a la gente compartir sus preocupaciones ante la creciente falta de acceso a las oportunidades laborales y a los servicios sociales básicos, en particular los relacionados con la salud y la alimentación.

73. En ese contexto, la decisión del Gobierno de autorizar la visita del Relator Especial a Myanmar es digna de elogio. Con su consentimiento a esta visita oficial, el Gobierno ha reanudado el diálogo con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y ha permitido que se investiguen los sucesos de septiembre y octubre de 2007. El Relator Especial confía en que las autoridades le faciliten la información adicional que solicitó respecto del paradero de los presos, las condiciones de la privación de libertad, la cifra de personas puestas en libertad y las causas de las muertes. El Gobierno le proporcionó unos registros detallados que satisfacían en parte sus peticiones. El Relator Especial seguirá en contacto con el Gobierno para tratar este asunto.

74. Sin embargo, el Relator Especial no vio signos que indicasen que el Gobierno esté atendiendo las demandas sustantivas establecidas en los párrafos 2, 3 y 4 de la resolución S-5/1 del Consejo de Derechos Humanos, en los que se insta al Gobierno de Myanmar a que, entre otras cosas:

"Haga respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, e investigue y enjuicie a los autores de violaciones de los derechos humanos, incluidas las recientes violaciones de los derechos de manifestantes pacíficos;

Ponga en libertad sin demora a los detenidos y presos como consecuencia de la reciente represión de protestas pacíficas, así como a todos los presos políticos de Myanmar, incluida Daw Aung San Suu Kyi, y a que vele por que las condiciones de privación de libertad se ajusten a las normas internacionales e incluyan la posibilidad de visitar a cualquier preso;

Elimine todas las restricciones a las actividades políticas pacíficas de toda la población, garantizando, entre otras cosas, la libertad de reunión y de asociación pacíficas y la libertad de opinión y de expresión, en particular a los medios de comunicación libres e independientes, y a que garantice al pueblo de Myanmar un acceso sin trabas a la información."

75. El Relator Especial lamenta no haber podido entrevistarse con la Secretaria General de la LND, Daw Aung San Suu Kyi, que podría haber reforzado el carácter independiente de sus investigaciones, aunque las autoridades le han confirmado que esta opción seguirá figurando en la agenda de sus misiones de seguimiento. El Relator Especial es consciente de la necesidad de una coordinación estrecha con los buenos oficios del Secretario General, y está en contacto habitual con el Sr. Ibrahim Gambari para tratar este asunto.

VII. RECOMENDACIONES

76. Teniendo en cuenta los objetivos de su misión a Myanmar, y las recomendaciones ya formuladas en sus informes anteriores, el Relator Especial sugiere que se proponga al Gobierno de Myanmar una serie de medidas inmediatas y de transición.

Medidas inmediatas:

- i) Garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad;**
- ii) Revelar el paradero de quienes aún están presos o desaparecidos;**
- iii) Devolver los restos de los fallecidos a sus familias para que puedan dedicarles un funeral acorde con su religión o creencias;**
- iv) Conceder al CICR y al personal humanitario independiente de otras entidades acceso inmediato a todos los presos;**
- v) Poner en libertad sin condiciones a todas las personas que han sido detenidas por haberse reunido pacíficamente o haber expresado pacíficamente sus ideas políticas;**
- vi) Amnistiar sin condiciones a quienes ya hayan sido condenados y retirar los cargos que pesen contra quienes estén siendo encausados;**
- vii) Investigar a fondo y de forma independiente los casos de muerte, agresiones físicas graves, tomas de rehenes, torturas y desapariciones;**

- viii) **Prohibir las milicias, que son ilegales con arreglo a la legislación de Myanmar;**
- ix) **Enjuiciar a los autores de violaciones de los derechos humanos y ofrecer recursos efectivos a las víctimas y sus familias;**
- x) **Entablar efectivamente un diálogo constructivo y sostenible con el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales, sobre todo con el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar;**
- xi) **Convenir con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar un mandato y unas fechas para su próxima visita;**
- xii) **Invitar a una comisión internacional de investigación o a una misión de determinación de los hechos a investigar de forma más exhaustiva los sucesos recientes.**

Medidas de transición:

- xiii) **Establecer un canal eficaz para las comunicaciones de seguimiento y la cooperación con el Relator Especial, y permitir que éste y su equipo de colaboradores hagan visitas periódicas al país.**
- xiv) **Estudiar la aplicación del plan de acción para la puesta en libertad de todos los presos políticos propuesto por el Relator Especial en su último informe a la Asamblea General (A/62/223);**
- xv) **Continuar el diálogo con Daw Aung San Suu Kyi por conducto del Ministro de Trabajo y Ministro de Enlace;**
- xvi) **Derogar o enmendar las leyes y reglamentos antiguos referentes al derecho a la reunión pacífica, al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de circulación y a todas las cuestiones relacionadas con el procedimiento penal y con la legislación penitenciaria;**
- xvii) **En el contexto de la Convención Nacional y de la reciente crisis, solicitar asistencia técnica para derogar o enmendar el código penal y el código de enjuiciamiento criminal, y revisar la normativa que rige el control de manifestaciones.**

Annex

CHRONOLOGY AND FACTS: THE PEACEFUL PROTESTS OF SEPTEMBER 2007 (18-25 SEPTEMBER 2007)

On 18 September, monks gathered at 9 am at the Shwedagon Pagoda to prepare the demonstration. At 1 pm a group of about 300 monks gathered at the southern stairway. The access to stairway was blocked by burly plain-clothed unarmed individuals who formed a cordon. The monks, after hesitating, marched instead to the downtown Sule Pagoda, then Botahtaung Pagoda, gathering several hundred lay followers as they went. Similar marches were held on subsequent days, gaining momentum every day despite torrential monsoon rains. One monk at the front of the procession held an upturned alms bowl, a symbol of religious boycott. There was no visible uniformed security presence, although plain-clothes personnel photographed and videoed the marchers. However, over the weekend of 22-23 September, the nature of the demonstrations shifted, becoming much larger in scale and more overtly political, thus posing a level of challenge to the regime that it must have found impossible to ignore. A highly symbolic moment in this regard occurred on 22 September, when a group of protesters were permitted to pass a police checkpoint and pass by the house of Daw Aung San Suu Kyi, who briefly appeared at her gate to greet them. By 24 September, the demonstrations in Yangon involved thousands of people led by monks. The same day, monks, nuns and students reportedly staged the largest demonstration so far in Sittwe (Rakhine state) demanding a reduction in essential commodities prices.

The general population in Yangon was becoming more defiant, increasingly taking part in the demonstrations rather than watching the monks or escorting them. Students, prominent political actors (from NLD and the ethnic political parties represented in the Committee Representing People's Parliament) and well-known personalities (actors, artists, writers) were joining the demonstrations, in some cases carrying red "fighting peacock" flags, a symbol of resistance. Comedian and former political prisoner Zaganar the movie star Kyaw Thu, and independent politician U Win Naing publicly offered food and drink to the monks before they started their march from Shwedagon. That evening, in the first reaction to the week of monk-led demonstrations, the authorities announced on television that further demonstrations would not be tolerated, and that action would be taken "according to the law". A statement by the Minister for Religious Affairs was carried on state television. No details were given concerning which laws he was referring to, but para. (b) of Order 2/88 of 18 September 1988 prohibits unauthorized public assembly of five or more persons (it should be noted that other provisions of Order 2/88 have been abrogated); and Order 6/90 of 20 October 1990 bans all unlawful Sangha (Buddhist monk) organizations, except the nine legal Buddhist sects. A number of other laws prohibit criticism of the Government or otherwise curtail freedom of expression.¹

¹ The Official Secrets Act of 1923, the Burma Wireless Telegraphy Act of 1933, Section 122, Penal Code of Burma, the Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions, Emergency Provisions Act of 1950, the Printers and Publishers Registration Law of 1962, State Protection Law of 1975 (a.k.a. the "Law to Safeguard the State from the Dangers of Destructive Elements"), the Television and Video Law, the Motion Picture Law and the Computer Science Development Law.

In his discussions with senior officials in Yangon, the Special Rapporteur asked why the Government had decided to “take effective action” at this stage of the demonstrations and what was the legal basis of the ban on gathering. He further enquired on whether the Government tried to engage in a dialogue with the monks after the incident of the 5 September in Pakokku and whether it tried to give consideration to the demands by the monks on 9 September. He asked whether the chain of command for law enforcement came from the police or in coordination with other sectors of the military, what was the role and connection of the Specific Operation N° 5, the participation of security forces, the number of police and other persons involved in the operations, arms authorized, and whether orders were given to fire with live ammunition and rubber bullets, and use smoke bombs, tear gas and water canons.

The Yangon Division Commissioner, U Hla Soe acknowledged that “the monk strike was due to the world increase of the price of petroleum which affected the change of fuel price in Myanmar on 15 August 2007. This was taken advantage of by the monks in Pakkoku to organize strikes and terrorism. Both internal and external anti-government organizations expanded the strike with the help of the media, persuading peaceful monks to go on strike, presenting a difficult solution for the authorities in a majority-Buddhist-living country and generating further opposition to the Government. According to the Commissioner the monk demonstration in Yangon began on 18 September when 150 monks assembled at Theinbyu Street in Botahtaung Township and marched to the East gate of Shwedagon Pagoda. Because of the prohibition of Divisional and Township Sangha Nayaka abbots, the marching monks made prayers in front of the Bronze Buddha Image at Yedashe junction and marched to Sule Pagoda from where to Botahtaung Pagoda and Pazundaung Market. On the same day 19 monks gathered and made the strike at Thingangyun Kyatksan Pagoda. On 19 September, 120 monks from Ahlone Township and 97 monks from South Okkalapa Nswe Kya Yan monastery assembled at Yankin Moegaung pagoda Compound and 30 monks at Mayangon Kaba Aye Pagoda did the same. Out of 150 monks in front of the Bronze Buddha Image at Bahan, some marched to Tamwe Shwe Baho Cinema Hall and some to Sule Pagoda and dispersed at Theinbyu Street”.

The Commissioner noted that “on 20 September 300 monks near the Bronze Buddha Image, East of Shwedagon Pagoda marched to Sule and Botahtaung Direction. Similarly 200 monks from South Dagon Township, 300 monks from South Okkalapa Ngwe Kya Yan monastery, 50 monks from Hlegu Township, 50 monks from Kon Chan Gon Township and 50 monks from Khayan Township marched through the town. On 21 September 540 monks from Ngwe Kya Yan monastery marched from Shwedagon Pagoda to Sule and Botahtaung Direction, 200 monks from North New Dagon Township, 15 monks from South Okkalapa Pagoda and Moengaung Pagoda, 70 monks from Than Lyan Township and 20 monks from Khayan Township marched about the township. After the 22 September strike the number of people increased in which the 88 Generation Student Group and anti-political party members persuaded the people and the roadside to join them on strike. Out of 45 Townships in Yangon Division, strike occurred in 36 Townships, sparing 9 Townships. The strike was mostly concentrated in a busy street in downtown of Yangon. The monk strike comprised 15,000 monks and 15,000 people which are beyond the estimate due to the majority of spectators which were peaceful at first, and later got involved by the political demon and terrorism”.

The Special Rapporteur was informed by the authorities that “buses and taxis were stopped and the passengers were emptied while the drivers were forced to take the striking monks to the Shwedagon and Sule Pagodas. At Tamwe Township, car owners were forced to drive the monks

to the Pagodas under threats of burning their cars. The owners were consequently beaten and the car doors destroyed. Two police motorcycles were burned and car windows were stoned. Trees were felled to block the way while advertising boards and telephone booths were destroyed”. According to the Commissioner “people suffered losses due to the anarchy and daily-wage workers became unemployed. The hawkers were affected in business and the taxi and trishaw drivers lost income. Stores and restaurants were shut and passengers were disturbed. The schools did not close but the parents kept their kids at home for fear of terrorism”. The Special Rapporteur was provided with a list recording from 17 to 26 September the “total number of Sanghas, nuns and laypersons participating in the praying procession activities on the Shwedagon Pagoda platform after having agitation leaflets dating 13 September”.

The authorities noted that “the strike monks did not obey the State Sangha Maha Nayaka Committee who instructed them to live according to Buddhist Sangha discipline. The monks are liable to obey the rules and instructions of Buddha and State Laws prescribed by the Committee”. On 24 September, the Directive 93 was issued by the State Sangha Maha Nayaka Committee calling for state/division/township/ward Sangha Nayaka Committees to supervise the monks and novices so that they only practice Pariyatti and Patipatti. In other words, the Directive prohibited the participation of monks in secular affairs.² The Special Rapporteur asked the Sangha what had been the process for issuing Directive 93 and whether the Parivetti and Patipatti prevents monks to address the economic and social grievances of peoples. He was informed by the authorities that “the activities of the strike monks, 88 Generation Student Group, Political parties and terrorists affected the peace, security and lead to riots. In order to prevent the danger to the public, the Curfew N 144, under the Code of Criminal Procedure was announced according to the existing law by the Yangon Division Commissioner himself. The Order N 1/2007 was announced at 8.45 pm on 25 September which was made known to the public from 9 pm through the towns overnight by thirty-three cars through loud-speakers, advertised on boards at public places and broadcasted by the City FM Radio and advertised in newspapers and journals. Action was taken according to the law against people disobeying the order. Within three days of the strike, people were taken into custody and the worries of the public were reportedly released after which the Curfew Order was lifted step by step depending on the situation. The Order N 2/2007 at 9 pm on 2 October, the Order N 3/2007 at 8.45 pm on 12 October and the Order N 4/2007 at 6 pm on 13 October were announced with the approval of the Yangon Division Peace and Development Council. Curfew Order Section N 144 which was expected to be in force for 2 months, until 24 November, was lifted by Order N 5/2007 at 6 pm on 20 October because of local peace and stability”.

The Special Rapporteur met with the Minister of Home Affairs and 20 members of the Government-established Human Rights Body³ in Nay Pyi Taw. He was informed that “if more than 5 persons want to stage a demonstration, permission can be obtained from the authorities concerned in accordance with Notification N° 2/88 of the State Law and Order Restoration Council”. It was noted that “the protestors of September 2007 did not obtain prior permission

² New Light of Myanmar, 25 September 2007.

³ The formalization of the Human Rights Body was signed on 14 November 1997 by the Supreme Authority SPDC Notification, State P 53/2007, composed of 4 patrons (Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Key Justice and Attorney General) and 21 members.

from the authorities concerned in accordance with the procedures and acted against the Law. The instigation by some monks and laymen, who wants to overthrow the government through violent means, among the monks who peacefully participated in the demonstrations on the understanding that it was a religious act, led to violent activities. The Government had to control the situation in accordance with the Aid to Civil Power procedures”.

The Special Rapporteur was informed by the authorities that “the agitators contacted anti-government organizations based abroad, declared as terrorist organizations, and illegally received cash from them. The leading protestors aimed at paralyzing the State machinery through unrest and destruction to overthrow the Government, guided by anti-government organizations abroad through television broadcasts, internet websites and news media. The protestors in turn sent exaggerated information, photos and interviews to the foreign media painting the peaceful demonstrations as a political movement. The unrest which occurred in September was not the wish of the entire people, with the non-participation of these people”. It was noted that “at the beginning of the peaceful demonstrations, the Government tolerated without any action. The authorities concerned requested senior monks to prevent the violence. On 24 September the Minister for Religious Affairs reported the situation to the Chairman Sayadaw and members of the State Sangha Maha Nayaka Committee which issued nine directives instructing all monks to behave in accordance. Despite this, some monks involved in politics continued their activities with the infiltration of peaceful monks by violent persons and political opportunists instigated by foreign media. The demonstration transformed into violence and attacked security personnel by hitting with sticks and stones, putting state owned motorbikes and vehicles on fire, almost threatening lives.” The various warnings did not have a significant impact on the demonstrations, and on 25 September, tens of thousands of people again took to the streets of Yangon in protest. On the same evening, the authorities announced the night-time curfew (from 9 pm to 5 am), and by the following morning had positioned truck-loads of armed riot police and troops at key locations in Yangon, including at a number of monasteries. These troops sealed off a number of monasteries to prevent monks from joining the demonstrations.

The Minister of Home Affairs noted that “only the Government declared Article 144 in Yangon and Mandalay and the security forces dispersed the demonstrations. Therefore only 10 died and 14 were injured during the dispersion of a huge crowd of demonstrators. There were no monks among the dead. Among the tens of thousand of demonstrators, only those instigating and leading the demonstrations have been detained for investigation. Those who participated out of naivety in the demonstrations also violated the law, but were released after making undertakings”. He further stated that “up to 1 November 2,927 persons have been investigated and 2,836 of them have been released, with 91 persons remaining in custody. They have been detained and are investigated in accordance with the law for terrorist activities disrupting security and stability in connection with explosions, destructions and committing crimes. Those under temporary detention have been detained in accordance with the law and registered in the “Prisoner’s Personal Data”. It was reported by the authorities that the detainees who are not well have been given treatment by doctors from prison hospitals and township medical units. Each detainee is reportedly provided health care free of charge and arrangements are made for their health care, food and accommodation and for them to receive food from donors. Prisoners and detainees are treated kindly and sympathetically by allowing them to write to their families and receive food and necessities from them. The ICRC is allowed to visit prisoners together with

NGOs from Myanmar, but the ICRC stopped the visits since 2005 stating that joint visits are contrary to the norms.”

The authorities acknowledged that the demonstration were peaceful until the incidents were influenced by the meeting of the Security Council. The demonstrations were allegedly instigated by “terrorist” groups which had dispatched agents to the country working with labour groups, students and monks. Bomb blast, attacks with Yengali handmade tools and TNT explosives were reportedly used to obstruct the security forces and destabilize the authorities. These agents persuaded the demonstrators to come in strength robbing arms from security forces which had to intervene against the terrorist attacks, though without the intention of harming the peaceful demonstrators. During the Special Rapporteur’s visit to the monasteries and police station the authorities provided pictures of items that had reportedly been seized. The authorities informed the Special Rapporteur that they had learnt before the 18 August resumption of the National Convention, through a Karen statement, that monks attended trainings and that instigators had activated innocents at the Shwedagon and Sulive Pagodas. The law enforcements agents were responsible for enforcing the law against the mobs which had become a risk through their activities against the law. Around the Shwedagon Pagoda one group of 150 security forces and another group with 50 security people were facing 20,000 to 30,000 people.

The Special Rapporteur asked whether the SPDC had submitted a request to receive aid from civil powers. Under the Criminal Code Procedure Section 128, the police have the power to request assistance while law authorizes them to give orders. The Yangon Division and Peace Development controlled the police division. The Special Rapporteur enquired about the use of military commanders and participation of units used with Security Forces (11th, 6th and 77th light infantry divisions). The police forces were overwhelmed and had to ask for the support by military on 26 September at 1 pm, rendering aid to civil and military power. N° 3 and N° 77 light divisions participated, but not the N° 11 according to governmental sources.

The authorities said that they could not use the water canons, as they were not able to access the mobs and crowded areas, but used other techniques. It was noted that the decision to act was in accordance with the seriousness of the treat, decided by the Police Order and other chain of command. 13 police officers were reported wounded throughout the entire period of demonstrations (on 26 September) though no law enforcement agents were killed. The Special Rapporteur asked whether there were any prosecutions and who where the people responsible behind the procedures and there whereabouts. He was informed that the search by security personnel was complementary to the police forces and that there were only 1,200 police and military personnel. The Special Rapporteur asked where the arrested persons were placed, the coordination with the law enforcement and whether there were any civilians to be reported among the 1,200 effectives after the 26 September, when the General Administration Department and Police rendered the power to the Senior Commanders to act upon groups that controlled the monks. They noted that there were no women but only men who willingly wanted to join in accordance with Section 120 of the criminal code, rendering power to the law enforcement forces. The Authorities noted that until 26 September the events were totally under police command, while after the 26 September the events were rendered to military command, in collaboration with police and administration, under the surveillance of the SPDC. The operations were overseen by a Permanent State Division Judge/City Judge present at the scene. The 1940 Control manual (from the colonial area) and 1961 Manual for riot control were applied under the supervision of the police division of Yangon.

The excessive use of force against peaceful demonstrators (26-29 September 2007)

26 September

Several confrontations between the security forces and protesters reportedly took place at different locations in Yangon, including Shwedagon pagoda, Bahan Township, Tamwe Township, Shwe Gone Daing road, Sule Pagoda and Yangon City Hall. Other incidents were reported in Mandalay, Loikaw, Sittwe, Kachin state, and Ba Maw and Myitkyina. According to various independent and reliable sources, and direct testimonies of victims and witnesses, two major incidents occurred in the streets of Yangon. This includes the crackdowns at Shwedagon Pagoda and Sule Pagoda. Many have witnessed monks and civilians being beaten and slapped during the demonstrations.

Monks started marching at around 10 am. The gates of the pagoda were locked and all roads were blocked by the security forces (riot police and army). At around 11.30 am, more riot police arrived at the site. As they could not pursue their peaceful walk, monks sat down. According to a direct testimony one of the monk leaders, Ven Kovida, who participated in the demonstration,⁴ a delegation of monks attempted to enter into negotiations with the security forces. The monks were ordered to disperse and get into military trucks to be brought back to their monasteries. Fearing arrests or other forms of reprisals, the monks agreed to disperse with the condition of going back to their monasteries on their own. The security forces refused. At around 11.45 am, violence began at Shwedagon pagoda. As the monks refused to disperse, security forces started beating monks on their heads with rubber batons. Teargas and smoke grenades were reportedly used. One victim who witnessed the crackdown heard orders to beat monks coming from behind the riot police. Whereas unconfirmed allegations of killings were received, several witnesses interviewed saw monks severely beaten who were lying down on the floor without moving. They were not in position to say if they were dead or unconscious. Several arrests were also reported by various credible sources.

At 1 pm, security forces were blocking the road to Sule pagoda at the intersection, south of Traders hotel. At 2.05 pm, security forces fired shots in the air and what appeared to be teargas or smoke grenades at the intersection south of Traders hotel and north of Sule pagoda. The crowd was effectively dispersed, but re-assembled at the intersection just north of Traders. Protesters then gathered around Sule Pagoda downtown directly in front of troops, and continued to march around the area. Troops fired warning shots and either teargas or smoke grenades, which failed to disperse the people. Shots were fired in the air again at about 3 pm to scatter the crowd which kept re-assembling. At 3.10 pm, a large procession travelled south with many monks and walked across the front of the soldiers, without incident. They were travelling south on the north-south road one block east of Sule Pagoda Road, and then turned west to pass directly in front of the soldiers. At 3.15 pm, state television announced that all senior clergy should rein in their monks. According to the State-run newspaper the New Light of Myanmar, protesters entered homes, threatening families who refused to participate in the demonstrations. They also requested those who did not want to join the protests to provide financial assistance.⁵

⁴ See also International Herald Tribune, 26 October 2007.

⁵ New Light of Myanmar, 27 September 2007.

At 3 pm, most of the country's mobile phone lines were reportedly disconnected, preventing journalists and demonstrators from reporting on the crackdown launched by the security forces in the heart of Yangon. Several journalists were reportedly injured, including Than Lwin Zaung Htet of the magazine *The Voice*. The authorities closed internet cafés in Yangon while the government-controlled Internet Service Provider, Bagan Cyber, reduced internet traffic speed. It was getting harder and harder to send or receive photos and videos sent from Myanmar. Dozens of foreign journalists were refused tourist visas by the Myanmar embassy in Bangkok. Blogs, websites and Internet cafés were closed, while it was becoming increasingly difficult to call mobile phones from abroad.

The same day, the United Nations Secretary-General, Ban Ki-Moon, announced he was sending his Special Envoy, Ibrahim Gambari, to the region in response to the deteriorating situation in Myanmar, and once again urged Myanmar authorities to respond to the ongoing peaceful protests with the utmost restraint. While the Secretary-General's Special Envoy briefed the Security Council on the latest developments, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Louise Arbour, urged the authorities to allow the peaceful expression of dissent in the country and to abide by international human rights law in their response. She further noted that "the use of excessive force and all forms of arbitrary detention of peaceful protesters are strictly prohibited under international law." She stressed that the serious abuses being currently perpetrated by the security forces "may constitute international crimes and could invoke individual criminal responsibility".

27 September

The Ministry of Foreign Affairs called a meeting in Nay Pyi Taw for United Nations heads of agencies and foreign diplomats. The Government blamed the internal and external destructive elements for inciting monks to protest, influenced by some foreign embassies. The Government however insisted that it would act with restraint. On 27 September, despite a heavy presence of the security forces and the use of lethal force the previous day, the demonstrations continued in Yangon. There was a smaller participation of monks, no doubt due in part to the large number of arrests and ongoing security presence at monasteries. Ignoring again the appeals by the international community, the security forces responded to the ongoing demonstrations with further violence, with the army now playing a more prominent role. State media acknowledged the firing of warning shots, the killing of 9 demonstrators and several wounded, including women on September 27.⁶ Many observers suggested that the real figure was several times higher. A diplomat in Myanmar, when interviewed by radio, said "several multiples of the ten acknowledged by the authorities" have been killed.

About 10,000 people demonstrated around Sule Pagoda, at the intersection of Sule Pagoda Road and Anawrahta Street. They were staging a peaceful sit-down protest in the intersection. At about 1.20 pm, they were reportedly fired upon with teargas and smoke grenades and beaten by security forces. Many people were found to be soaked with blood running away. Several rounds of gunfire were heard. The Japanese photojournalist, Kenji Nagai was shot dead at this intersection. The army reportedly fired upon demonstrators near Thingangyun Kyaikkasan Pagoda as well as at the Tamwe roundabout and Pansodan. Several allegations of killings were

⁶ New Light of Myanmar, 28 September 2007.

received. In front of Trader's Hotel, 4 people were reportedly wounded from gunfire and one woman died on the spot after being shot.

According to various reports and testimonies, a particularly brutal incident occurred nearby the State High School No. 3 in Tamwe Township. One witness saw the crowd being ambushed by the security forces in front of the school. The army opened fire and drove a truck into the crowd, killing at least 2 people. The soldiers then stopped the truck and came out. They first shot in the air, then, at people. They did not make any announcements or warnings before they began shooting. One witness saw soldiers who shot one boy in the back when he was climbing the wall of the High School N° 3. One student, Maung Tun Lynn Kyaw, who died was reportedly shot in the head in cold blood in front of his mother. According to other sources, 5 or more people were killed. Many injuries and arrest were also reported during the incident. Several reports indicate that dead bodies were removed by the security forces. In the same area, one killing at the corner of Anawrahta and Pansodan streets was reported by an eyewitness. One young man was holding the fighting peacock flag and had an NLD Youth badge on his white shirt. He was reportedly shot in the head. There was only one shot and no soldiers in the immediate vicinity. Soldiers and police descended on several hotels in Yangon, including Traders, to check the IDs of foreign journalists. Internet and international phone lines were still open at these hotels. That night, further raids by security forces on monasteries were reported, and the surrounding areas were declared no-go zones. There were also raids on a number of residential areas and many arrests were reported.

28 September

The following day, the demonstrations had become much smaller, and were quickly broken up by security forces, with a number of further fatalities reported, and a large number of arrests. Among the fatalities, 3 more killings at the corner of Anawrahta and Pansodan were reported at around 2 pm. Eyewitnesses saw people being pushed back by trucks of military on Pansodan bridge and riot police charging and arresting a few people in front of the Traders Hotel.

The main public internet link to the country was closed down, which significantly reduced the flow of media information coming from the country. The two internet service providers in the country are State-controlled. The only other internet access is by dedicated satellite links (such as those operated by foreign embassies, the United Nations, or multinational companies), as well as possibly a small number of data capable satellite phones. The same day, the State-run newspaper the New Light of Myanmar reported that more 5,700 people from Taungtha Township (Mandalay Division) staged a peaceful demonstration with the permission of the local authorities to protests against the demonstrations led by the monks.⁷ The following days, several ceremonies and demonstrations were organized by the Government to support the national convention and constitution.

⁷ New Light of Myanmar, 28 September 2007.

29 September

When the Secretary-General's Special Envoy, Ibrahim Gambari arrived in Yangon in the afternoon, several demonstrators including some monks demonstrated in downtown Yangon. The demonstrations were mainly led by high school students. Troops fired warning shots. Demonstrators were reportedly cordoned off, beaten and arrested. Many escaped and staged demonstrations in other parts of downtown. A procession of 800 followed by civilians took place in Pakokku from 2 to 3.30 pm. At Kyaukpadaung, monks, nuns and civilians demonstrated peacefully. No significant incident was reported. Additional reports of killings were received, including a 40 year-old man named Pho Zaw and an 18 year-old man named Sunni Kalamalay.
